

Manejo del medio ambiente y desarrollo en la Argentina

Marina Sansostri Ratchford

Tradicionalmente, Argentina ha considerado la protección del medio ambiente como un lujo para países ricos. Este artículo argumenta que debe ser considerado como parte integral del desarrollo. Se analizan las asociaciones entre los sistemas ambientales y económicos, confirmándose la necesidad de adoptar políticas integradas. También se exploran las principales ventajas y problemas ambientales, así como las relaciones históricas entre políticas de desarrollo, economía, gobierno y medio ambiente. El artículo concluye fomentando la adopción de un modelo de desarrollo sostenible, junto con un número de recomendaciones políticas para reconciliar el crecimiento económico y la protección ambiental.

Tradicionalmente, la Argentina ha permanecido periféricamente interesada en la preservación del medio ambiente, y ha considerado los asuntos ambientales —de la misma manera que la mayoría de los países en vías de desarrollo— como productos marginales de un crecimiento económico de alto nivel. Las políticas de manejo ambiental no han podido ser aceptadas en este país, situado en las primeras etapas del desarrollo socioeconómico.

Desarrollo y medio ambiente en la Argentina

Un análisis de los recursos disponibles renovables y no renovables argentinos sugiere que el país posee un conjunto de atributos naturales y humanos que deberían hacer del desarrollo una tarea más bien simple. Pocos países en Latinoamérica tienen un potencial para el desarrollo económico tan promisorio como este, dotado de significantes recursos naturales como las pampas (una de las áreas más fértiles del mundo), así como de aceite, gas natural y minerales. El vasto territorio comprende cerca de 3.000.000 de Km², y la Argentina es el octavo país en tamaño del mundo; en contraste, su población

MARINA SANSOSTRI RATCHFORD: directora del Programa para América Latina y el Caribe de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (AAAS), Washington D.C.

Palabras clave: medio ambiente, desarrollo, Argentina.

es de solo 35 millones y es sobrepasada por 29 países¹. Este extenso abastecimiento de recursos y la baja densidad de población sin duda han reducido el impacto ambiental de las actividades económicas. Al mismo tiempo, la alta productividad natural del ecosistema pampeano ha permitido más de un siglo de explotación productiva con una baja intensidad de ingredientes químicos. Otra característica que ha sido relativamente favorable al medio ambiente en la Argentina es la remarcable estabilidad de su ambiente físico. La geografía, geología y relieve de las principales áreas ecológicas del país, particularmente aquellas donde la población está concentrada, son relativamente estables, facilitando su asentamiento y simplificando su manejo (IIED-AL, p. 38). Los centros urbanos están localizados principalmente en las grandes llanuras, al margen de los ríos y en las áreas costeras. Esto ha permitido un abastecimiento de tierra casi ilimitado, accesibilidad a agua fresca, y circulación de viento permanente que reduce la contaminación del aire, todas condiciones favorables a un ambiente urbano de buena calidad.

A pesar de estos valiosos atributos, «el medio ambiente es una de las áreas de atraso que nos fuerza a clasificar a la Argentina todavía como un país en vías de desarrollo», como ha indicado Andrés Liebenthal, economista de alto rango del Banco Mundial (Pignotti, p. 1). El interés en problemas ambientales se considera un lujo. En los foros internacionales por ejemplo, los representantes latinoamericanos aluden a menudo al interés en el medio ambiente como «otro medio más por el cual el Norte industrializado puede mantener al Sur esclavizado» (Tulchin, p. 1). Por lo tanto el medio ambiente, mayormente percibido como un problema a largo plazo, ha tenido poca prioridad.

El medio ambiente en la Argentina ha sufrido también por el avalúo inferior de los recursos naturales. En Argentina, como en la mayoría de los países en vías de desarrollo, muchos recursos naturales han sido destrozados para permitir actividades agrícolas y urbanas. Dos factores principales de esta destrucción han sido la privatización de tierra a gran escala en el siglo XIX y el inadecuado desarrollo de los recursos de propiedad pública como minerales, bosques y pesca. Los estilos de desarrollo que han predominado en la Argentina, caracterizados por la dependencia al abastecimiento de recursos renovables junto con una muy baja percepción del deterioro ambiental, han acelerado el proceso de destrucción. La relación entre los estilos de desarrollo y la degradación del medio ambiente es analizada con más detalle a continuación.

Principales problemas ambientales

Como en otros países de la región, la degradación y el agotamiento del suelo y de los bosques son dos de los problemas ambientales más destacados en la Argentina, que es uno de los más atrasados entre los grandes productores

1. U.S. Bureau of the Census, International Data Base [Agencia del Censo de los Estados Unidos, Base de Datos Internacionales] y 1996 *CIA World Factbook*.

agrícolas en conservación del suelo. El territorio nacional incluye 46,4 millones de hectáreas con varios niveles de erosión. Una estimación conservadora es que un 20% del área total del país está erosionada en cierto nivel². El abundante abastecimiento de tierra y la baja densidad de población han creado la percepción de que la migración a nuevas áreas es más fácil y barata que la inversión en áreas ya usadas. De este modo, el estilo de desarrollo agrícola argentino ha dado por sentado la existencia de un abastecimiento infinito de tierra. En realidad la gran fertilidad natural de la región central ha ocultado una degradación a largo plazo. En los próximos 20 años es previsible que, tomando en cuenta el enorme potencial productivo, el problema de la erosión deba ser controlado en casi dos millones de hectáreas. La tierra ha sido desgastada y su capacidad productiva disminuida, sobre todo a través de la erosión, la salinización, la alcalización, la saturación del agua y la degradación química. Si la tierra se degrada permanentemente en áreas semiáridas y áridas, ésta se transforma en un desierto. Los impactos ambientales de la deforestación son particularmente llamativos en las laderas de los Andes, causando erosión de suelos, sedimentación de ríos, inundaciones periódicas y avalanchas. Las actividades que resultan en el desmonte de bosques primarios son la plantación de coníferas subtropicales en los bosques templados, la plantación de coníferas templadas en las estepas de la Patagonia, y la expansión de tierras pastorales y agrícolas en la estepa del sur de los Andes. La deforestación causada por actividades de agricultura y ganadería se lleva a cabo solo en áreas pequeñas, ya que la mayoría de dichas actividades requieren préstamos, los cuales son cada vez más difíciles de obtener, dada la situación económica.

La puesta en peligro de varias especies está transformándose rápidamente en un problema ambiental sustancial. Dentro de las 4,5 millones de hectáreas de áreas protegidas, hay todavía una gran caza ilegal, derivada de la falta de control y financiamiento para hacer cumplir la ley. En el área chaqueña la caza ilegal es un gran desafío para aquellos que viven alrededor del Parque Nacional Chaco. La pobreza extrema de los habitantes de esta región hace de un trozo de carne de pecharí la única fuente de carne posible en un mes, y la posibilidad de venderla, el único modo de obtener dinero. Esta situación resulta de tener un parque extremadamente rico en recursos rodeado de una población muy pobre.

Los problemas ambientales urbanos en la Argentina tienen relación directa con la dramática concentración poblacional, especialmente en Buenos Aires. Un tercio de la población urbana vive en villas miseria, carente de beneficios sociales. El movimiento acelerado hacia los municipios y ciudades ha sobrecargado la infraestructura del gobierno local para proveer servicios públicos

2. «El deterioro del ambiente en la Argentina», Fundación para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Centro para la Promoción de la Conservación del Suelo y del Agua, Buenos Aires, 1988.

a la comunidad. Como consecuencia, se han originado deformaciones en todo el sistema, muchas de ellas produciendo el deterioro del medio ambiente, tales como la insuficiencia de agua, el ineficiente desecho de basura, una infraestructura de vivienda inadecuada y un tránsito pesado que produce gases y ruidos nocivos. La situación se torna aún peor en aquellas zonas saturadas de población e industrias. Este problema ha sido enfocado en las zonas urbanas de dos maneras: por el Gobierno, a través de políticas de zonificación de tierras en los nuevos planes urbanos, y por los habitantes opulentos, quienes se han mudado hacia los suburbios.

El impacto más serio de la urbanización es la multiplicación de viviendas marginales dentro y en la periferia de Buenos Aires. Este desarrollo disperso, debido a bajos precios del combustible, ha causado que el cumplimiento de las normas ambientales sea mucho más difícil y costoso que en el caso de una población que está dentro del uso de tierras más eficiente en cuestiones de energía. Buenos Aires, lugar de residencia de aproximadamente 12 millones de personas, como muchas otras grandes ciudades latinoamericanas se ha expandido demasiado rápido hasta transformarse en una gigantesca metrópolis, y sus servicios no han podido seguir al mismo paso (Escobar, p. A8), lo que ha generado altos niveles de contaminación del aire, agua y suelo. Los registros de contaminación de Argentina son tétricos comparados con otros países de desarrollo económico similar. La nación está detrás de todos los países excepto los más pobres del mundo, en cuanto a servicios cloacales, por ejemplo. Debido a que en Buenos Aires se deja que las cloacas y desperdicios contaminen las mismas fuentes de donde se extrae el agua potable, un cuarto de la población la bebe contaminada, causando diarrea entre los niños. A pesar de que la contaminación de las fuentes no es un problema visible ya que está restringida a áreas marginales, constituye el problema ambiental con el mayor costo social. Más del 60% de la población utiliza tanques sépticos; la mitad no posee grifos y debe sacar agua de pozos a través de una bomba, pozos que en su mayor parte están contaminados.

Usando lo que se describe como «escasos datos disponibles», el Banco Mundial identifica a la contaminación de fuentes de agua como la calamidad ambiental con mayores repercusiones, seguida por la contaminación del aire (Pignotti, p. 1). La contaminación del aire está limitada a las grandes ciudades con condiciones topográficas y climáticas específicas, y los centros urbanos más pequeños donde hay una gran concentración de actividades con emisiones contaminantes –mayormente industriales. En Argentina, este problema existe en Buenos Aires, Córdoba, Campana y San Lorenzo. Una característica muy difundida de las ciudades argentinas es la falta de control de las emisiones industriales y automotoras, dos fuentes principales de contaminación. Los controles efectivos son difíciles de llevar a cabo, debido a la falta de equipamiento tecnológico y recursos para diagnosticar y regular el problema, junto con un alto grado de inconsistencia en las políticas de restricción de la contaminación. En general, la contaminación industrial en la Argentina es el resultado de un crecimiento en el volumen de producción y de la adopción de

tecnologías inadecuadas; ambos hechos tienen lugar sin considerar sus consecuencias. Otros factores clave han sido la gran disposición por parte de corporaciones multinacionales a abusar de la falta de controles, así como la aversión de empresas públicas, privadas y extranjeras a invertir en la reducción de los niveles contaminantes, y la incapacidad de sucesivos gobiernos de sobrellevar un mínimo nivel de control de la contaminación y de manejo del medio ambiente (IIED-AL, p. 45).

Otro problema urbano crucial es la producción y el desecho de basura y desperdicios. La ciudad de Buenos Aires produce 4,5 millones de toneladas de basura al año, con un costo de 500 millones de dólares. La cantidad de basura tiene relación directa con el nivel de ingresos por persona. La clase alta desecha 1,35 Kg de basura al día, un 14% es todavía perfectamente usable y constituye un desperdicio superfluo. La clase media tira 0,85 Kg, mientras que la baja, 0,54; el porcentaje de desperdicio superfluo es también más pequeño para las clases bajas: 9 y 7% respectivamente. Dos temas ambientales importantes surgen del problema de la basura. Por un lado, la falta de servicios de recolección para las viviendas. El porcentaje de viviendas con bajos ingresos con servicios de recolección varía entre el 13 y el 60% (IIED-AL, p. 41). Solo el Gran Buenos Aires y Córdoba poseen sistemas de basurales sanitarios. En otras áreas urbanas, los desechos de las casas son simplemente arrojados a sitios abiertos. Por otra parte, está resultando cada vez más difícil encontrar un lugar dónde depositar tanta basura. En el presente, capas de basura y tierra se alternan hasta que la acumulación llega a los 22 metros. La meta de las autoridades municipales es eventualmente cubrir estas montañas con plantas y árboles para transformarlas en espacios recreacionales. Este proceso se ha repetido desde 1977, año en que la dictadura militar prohibió el sistema de incineración y creó el lucrativo negocio de las máquinas compactadoras, una de las primeras medidas ambientales en el país. Igualmente, el problema persiste ya que, a este paso, los basurales estarán saturados en 20 años. Mientras tanto, la basura emana fluidos tóxicos que contaminan el agua. Además, existe un límite en la cantidad de basura que puede ser desintegrada por bacterias. Más allá de ese límite, los desechos se momifican. Hay quienes proponen llevar la basura a localidades distantes, pero la ley prohíbe el movimiento de basura a más de 20 kilómetros de distancia. A su vez, el problema se agrava cuando muchos recolectores evitan pagar el canon (10 dólares por tonelada) a las entidades oficiales que entierran la basura, y en cambio la envían a quemaderos ilegales.

Además de los problemas ambientales regionales y nacionales, también existen los derivados de las actividades en el hemisferio norte. Por ejemplo, el uso de procesos y equipamientos antiguos es una amenaza frecuente al medio ambiente en la Argentina y en otros países latinoamericanos. Este fenómeno sucede ya sea porque estos países no tienen el conocimiento y medios necesarios para desarrollar su propia tecnología o porque son política y económicamente presionados por los países desarrollados y las instituciones financieras internacionales. La venta de antigua tecnología contaminante

de países ricos a pobres es un caso de todos los días. Se lleva a cabo bajo el nombre de 'ayuda' con el pretexto de que el medio ambiente de los países en vías de desarrollo tiene una capacidad mayor para absorber la contaminación (Vieira, p. 12). Asimismo, existe una permanente presión para acceder a una parte del territorio nacional y que éste sea usado como depósito de los desechos procedentes del Norte. Se han hecho varias propuestas para la importación de desechos tóxicos a la Argentina. Hacia fines de 1987, la compañía American Security International inició negociaciones con los gobiernos de Argentina, Perú, Uruguay y Paraguay, proponiendo la exportación de 100.000 barriles al mes de desechos tóxicos provenientes de industrias localizadas en Estados Unidos, ofreciendo un pago de 40 dólares por barril. Los desechos incluían solventes, lubricantes usados, lodo químico y otros materiales tóxicos. Como consecuencia de la publicidad y creciente preocupación pública, varias disposiciones han sido elaboradas con el propósito de impedir las adquisiciones de desechos tóxicos. El tema permanece como un problema potencial ya que, hasta la fecha, no se ha establecido una definición legal de lo que constituye un desecho tóxico.

Los estilos de desarrollo

Hasta la década de 1930, la Argentina ocupó los lugares más altos en desarrollo económico. Desde entonces, el país se ha estancado económicamente y ha sufrido una grave inestabilidad política. En el enfrentamiento de estos problemas no ha existido un consenso sobre la mejor solución. Desde 1930 hasta 1980, las alternativas de desarrollo existentes presentaron un dilema entre dos enfoques contradictorios de políticas económicas: la política de sustitución de importaciones, apoyada por los partidos más importantes, y la política agrícola de devaluación, respaldada por los sectores conservadores. Ninguno de estos enfoques ha resultado correcto. El esquema sustitutivo fracasó al destrozarse el sistema de precios y favorecer la ineficiencia, mientras que el uso de las exportaciones agrícolas como medio de desarrollo se frustró debido a la inelasticidad de la demanda de tales productos en los mercados internacionales y a la resistencia política dentro del país. Como resultado, Argentina ha sufrido 40 años de estancamiento e inflación. Dado que la inflación alta y continua reduce inevitablemente la perspectiva de tiempo de políticas económicas —haciendo que solo las inversiones con ganancias altamente lucrativas e inmediatas sean atractivas— su impacto sobre la cultura general y el medio ambiente ha sido sustancial. La falta de previsión a medio plazo (aproximadamente unos cinco años) ha sido el principal obstáculo contra la integración efectiva del medio ambiente a las preocupaciones y objetivos nacionales. A pesar de que algunos síntomas de degradación y agotamiento ambiental aparecen en el mediano plazo, los efectos ambientales y en la salud de las actividades de hoy solo podrán ser percibidos por las generaciones futuras. La ineficiente distribución de recursos de ambos estilos de desarrollo se caracterizó por la dependencia del abastecimiento de recursos renovables junto con una baja percepción de los procesos de deterioro ambiental.

Desde 1983, sucesivos gobiernos democráticos han tratado de alejarse de la inflación persistente y del estancamiento de décadas anteriores, intentando implementar un grupo básico de políticas de ajuste estructural. Pero no han alcanzado las metas esperadas por instituciones financieras internacionales ni tampoco han logrado los resultados previstos. De acuerdo a estimaciones de la Cepal, desde la década de 1980 ha existido en la Argentina un aumento continuo en la pobreza y desigualdad de ingresos. En 1989, el primer gobierno de Carlos Menem se embarcó en un severo ajuste ortodoxo, de alcances sin precedentes, que ha tenido resultados mixtos en términos macroeconómicos y ha agravado los problemas sociales y ambientales en vez de aliviarlos. Uno de los logros principales de ese gobierno ha sido un esquema cambiario estable. Sin embargo, en muchos aspectos la estabilidad del dólar ha sido perjudicial para el medio ambiente. Es mucho más barato ahora comprar recursos naturales en el exterior que reciclar materiales usados. Asimismo, hasta que aparecieron los sofisticados sistemas de empaque, la cantidad de desechos era insignificante, y la poca basura era en su mayoría biodegradable. En los últimos 10 años, el porcentaje de basura no-biodegradable ha aumentado drásticamente y la recolección se ha duplicado desde la década anterior.

Las consecuencias de las políticas económicas adoptadas para afrontar la crisis de la deuda externa han tenido repercusiones sociales y ambientales. Antes se mencionó que un efecto directo de la promoción de exportaciones fue fomentar la explotación de recursos naturales. Pero los efectos indirectos de la deuda externa fueron aún más significativos. Argentina recibe incentivos de agencias internacionales de ayuda y bancos extranjeros para imitar los patrones de desarrollo de los países industrializados, buscando un PBI más alto y gastando más en tecnología que en el cumplimiento de las necesidades sociales. Este modelo de iniciativa, orientado al consumidor, promueve una creciente dependencia del exterior, desigualdad en la distribución de ingresos, marginación de grandes sectores de la población, degradación de recursos naturales e importación indiscriminada de tecnología. Al reducir las obras públicas y los abastecimientos estatales, las políticas económicas neoclásicas de ajuste devienen en una calidad de vida inferior para muchos grupos familiares pobres, desempleo creciente, rebaja de sueldos reales y acceso restringido a servicios de salud y educación. Por esa razón, todo debate acerca de un modelo alternativo de desarrollo económico para la Argentina debe ser expuesto dentro del contexto actual de antecedentes internacionales desfavorables y una política doméstica de estabilización sin éxito.

Un modelo alternativo de desarrollo

La revisión de los principales problemas ambientales indica que el obstáculo principal en cuanto al manejo del medio ambiente no es la escasez de recursos naturales o de tecnología sino un obstáculo de naturaleza política. La falta de acción política a nivel global y nacional impide las transformaciones necesarias para el logro de un modelo de desarrollo socialmente equitativo y sin daño al medio ambiente. La necesidad urgente de desarrollo en la Argentina

y las periódicas crisis económicas hacen que la conservación y protección de recursos naturales y medio ambiente tengan escasa prioridad. Como muchos otros países en vías de desarrollo, la Argentina en estos momentos necesita no solo incorporar el medio ambiente como un nuevo problema a las políticas de desarrollo, sino un ejercicio mucho más fundamental: el de reconcebir conjuntamente las estrategias de desarrollo y el medio ambiente (IIED-AL, p. 38). Dicho ejercicio se logra mediante el modelo de desarrollo sostenible. Este modelo reconoce la diferencia entre el crecimiento, el cual es finito, y el desarrollo que, como lo define la Comisión Brundtland, «satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacer las necesidades futuras» (Tulchin, p. 3).

Desarrollarse, en este contexto, significa el alcance del potencial propio y el logro de una situación mejor, mientras que «crecimiento» significa un aumento en tamaño, que tiene dimensiones materiales físicas, mientras que el desarrollo es una mejora cualitativa. El objetivo del desarrollo sostenible es una mejora en la calidad de vida humana sin dañar los sistemas y recursos naturales. La aplicación de un modelo de desarrollo socialmente equitativo que no transfiera costos a las generaciones futuras requiere del manejo, e incluso la transformación, de la estructura y función de los ecosistemas, haciendo uso de los bienes y servicios que proveen, minimizando los conflictos que acompañan a su explotación, maximizando el apoyo mutuo entre las acciones y actividades necesarias, y compartiendo los costos y beneficios ecológicos entre la gente involucrada. Las siguientes recomendaciones generales y específicas abarcan consideraciones ambientales, sociales y económicas y asistirán a los creadores de políticas en el logro de dicha transformación estructural.

Propuestas generales

Uno de los pasos cruciales en la implementación del desarrollo sostenible es convencer a los creadores de políticas que la protección ambiental puede ser económicamente eficiente. Incentivos económicos pueden ser utilizados no solamente para reducir el conflicto entre desarrollo económico y protección ambiental sino también para hacer del primero uno de los vehículos que permiten el mejor logro de la segunda. Por otro lado, las tecnologías ambientalmente estables deben ser bienvenidas, aunque el Gobierno no se involucre en su desarrollo. Asimismo, el Gobierno debe financiar más programas de educación e investigación en temas relacionados con las ciencias naturales y la planificación de terrenos y a sus sistemas informativos de apoyo para estimular actividades de investigación y desarrollo. Otro paso importante es la integración del medio ambiente a las etapas claves de planificación y priorización de políticas, como los programas sectoriales y los planes agregados. La programación sectorial es la etapa intermedia entre el establecimiento de las metas y políticas sociales y su transformación en acciones o proyectos. Los planes agregados ponen énfasis en variables macroeconómicas como los productos, ahorros, inversiones y consumiciones nacionales y sus relaciones, para estimular el crecimiento de los ingresos nacionales y su distribución.

Las evaluaciones de impactos ambientales (EIA) también suelen ser muy útiles para la tarea de reconciliar el desarrollo con el medio ambiente. Esta actividad está diseñada para identificar, predecir, interpretar y comunicar información sobre el impacto de un proyecto de desarrollo, incluyendo consideraciones ambientales, de salud y de ecología humana; en especial para las actividades gubernamentales, es sumamente recomendada y muchas veces obligatoria. Las EIA pueden ser útiles, por ejemplo, en cuestión de criterios y parámetros de medición de todo tipo de contaminación. Como las regulaciones para controlar la contaminación son muy restrictivas, percibidas como parte de un artificio para disuadir el desarrollo industrial, es necesario poner énfasis y promocionar las EIA como alternativa de prevención en lugar de cura. En relación con las EIA, otra posible herramienta para determinar los efectos de un determinado proyecto es la evaluación y análisis de sus costos y beneficios, una práctica bien establecida pero también muy polémica.

Los países desarrollados y en vías de desarrollo enfrentan muchos desafíos en común que podrían ser enfrentados de mejor manera mediante aunados esfuerzos. Por eso, la cooperación internacional es sumamente importante para asegurar la protección ambiental, siempre y cuando esté basada en propuestas para empresas cooperativas enfocadas hacia este objetivo, y que dichas propuestas sean mutuamente debatidas y libremente aceptadas. La crisis de la deuda externa ha sido vista por algunos expertos como una oportunidad para incentivar a la Argentina y otros países de América Latina a adoptar nuevas leyes de protección ambiental a cambio de un alivio o renegociaciones a través de canjes de deuda por naturaleza. Por ejemplo, Chile, el país de la región que ha hecho más esfuerzos en cuanto a conversiones de deuda (convirtiendo alrededor de 8.000 millones de dólares) es también uno de los países con más bajo porcentaje de inflación en Sudamérica. En Argentina, se han propuesto algunas ofertas y preparado varios proyectos de ley para regular este mecanismo. A la fecha, el único resultado ha sido un debate en los círculos académicos, políticos e institucionales. En este caso es importante notar que los canjes de deuda por naturaleza no deben entenderse como canjes de deuda por recursos intangibles. La idea de establecer áreas bordeadas sin beneficio al país anfitrión es contraria al objetivo principal de este mecanismo. La interconexión intrínseca de salud, población, pobreza y degradación ambiental apunta a las raíces de la destrucción en la Argentina, no solo a los síntomas. Los canjes de deuda por naturaleza deben incluir reservas extractivas, programas de educación ambiental, renovación de centros locales de investigación, oportunidades para ecoturismo y mejoramiento de servicios públicos de salud.

También hay fondos internacionales disponibles para un manejo ambiental cooperativo. Estos recursos pueden ser importantes para abordar problemas ambientales si se los acompaña con la adecuada cooperación tecnológica. En particular, existen varias áreas donde la cooperación internacional es posible, tales como la implementación de programas para promover la conciencia del medio ambiente, el desarrollo de políticas regionales para la prevención de

catástrofes ambientales y la capacitación de recursos humanos en cuestiones ambientales (Muñoz, p. 9). Sin embargo es improbable que la Argentina se convierta en un importante recipiente de fondos internacionales, ya que el país no cumple con los criterios generalmente utilizados para su asignación, como el crecimiento acelerado de la población, la destrucción de bosques tropicales u otro recurso ambiental de alta prioridad mundial y las grandes emisiones de gases de efecto invernadero (IIED-AL, p. 49). Por esa razón, los argentinos, incluyendo Gobierno, empresas y población en general, deben advertir que la responsabilidad de combatir la degradación ambiental yace en ellos mismos.

Es importante convencer a los partidarios del crecimiento que los proyectos de desarrollo económico a corto plazo que degradan al medio ambiente son al fin y al cabo contraproducidos. Pero también es necesario que los grupos defensores del medio ambiente entiendan que la pobreza misma es una gran amenaza a la protección ambiental. El desarrollo sostenible no es posible sin la erradicación de la pobreza, hoy en aumento. La pobreza se manifiesta a través del déficit, en lo que respecta a las finanzas gubernamentales, y también en el bajo nivel de ingresos por persona. Los sectores pobres de la población se encuentran más y más marginados, lo que les impide hacer frente al impacto combinado de pobreza y degradación ambiental. Este problema se agrava por el hecho de que, generalmente, los grupos más pobres viven en los barrios más contaminados y en las áreas más peligrosas y vulnerables a los desastres naturales. La desigualdad en la distribución de ingresos y riqueza es otro factor que lleva a la contaminación ambiental. Desde el punto de vista individual, la gente con bajos ingresos tiende a degradar el medio ambiente involuntariamente, ya sea viviendo en villas miseria donde está rodeada de sus propios desperdicios, causando la erosión del suelo mediante la deforestación y el uso intensivo de tierra cultivable, o contaminando el suelo y el agua donde no se les provee de sistemas cloacales. Ya que el propósito de este ensayo no es el de brindar un análisis detallado acerca de cómo combatir la pobreza, las recomendaciones en este caso se limitarán a insistir que, en temas de desarrollo económico y protección ambiental, no es posible elegir uno u otro. En cambio, el enfoque debe cambiarse hacia la identificación de políticas o instrumentos políticos que promuevan el alivio de la pobreza y que, al mismo tiempo, protejan al medio ambiente.

Es necesario, asimismo, hacer más énfasis en la protección de los recursos naturales por razones ecológicas y en su preservación para generaciones futuras. Ya fue mencionado el caso del Parque Nacional Chaco, rico en recursos pero con una población pobre circundante. Para aliviar este contraste, el área del parque estrictamente protegida que no permite ningún habitante debería ser rodeada de una reserva natural moderadamente controlada con un cierto número de gente que la habite, quienes cazarían en una forma limitada. Mediante vigilancia conducida por los guardaparques del área, la conservación de especies se realizaría de una forma más eficiente. Otras políticas que pueden ser implementadas para mejorar el uso de la tierra y los recur-

Los recursos naturales incluyen iniciativas específicas de rehabilitación de tierra basadas en las ventajas comparativas de cada área, la redefinición de áreas aptas para la agricultura, y un aumento en la productividad de las áreas agrícolas existentes, como alternativa al avance de la frontera agrícola.

Para atacar el grave problema de la basura y los desechos, los basurales eran una buena solución hace 40 años. Pero ahora es tiempo de emprender un programa de reciclaje. Esto requiere de una decisión política, ya que hoy es más barato usar materiales nuevos que rescatar productos usados. La industria del reciclaje debe ser creada e incentivada por el Gobierno argentino (como en EEUU y en la Comunidad Europea), una política que también ayudaría a bajar el alto nivel de desempleo. En Japón, se deben pagar 180 dólares por cada tonelada de basura que se entierra y en Alemania existe un límite en la cantidad de basura que una persona puede desechar. Como resultado, los ciudadanos prefieren comprar sus mercaderías sin empaque. Es irónico que cada día en Argentina 600.000 latas de gaseosas y cerveza sean desechadas, cuando el país importa bauxita, el material necesario para fabricarlas. El gas metano que emana de los basurales también es una fuente económica potencial que no está siendo explotada. Mientras que en Chile el gas se utiliza para uso doméstico, en Buenos Aires simplemente se lanza al aire.

Las recomendaciones en este ensayo dan forma a la definición de ecodesarrollo: el desarrollo en el nivel regional y local cónsono con los potenciales del área involucrada, enfatizando el uso adecuado y racional de los recursos naturales, la aplicación de tecnología, y las formas de organización que respeten el ecosistema natural y los patrones socioculturales locales. Esto significa que para lograr un mejor manejo ambiental el país necesita un fortalecimiento institucional en todos sus niveles de organización. Los problemas de coordinación entre sectores y entre las instituciones creadoras de políticas locales, regionales y nacionales deben ser resueltos antes de poder implementar las estrategias elegidas. El abandono de los intereses locales en la planificación e implementación de planes por parte de las autoridades centrales es la principal razón por la cual los proyectos y programas gubernamentales son vistos con desconfianza a nivel rural o popular. Para lograr una planificación participativa, cierto grado de autoridad central debe ser delegado a las organizaciones locales. Las agencias centrales también deben mostrar la voluntad de apoyar y aprender de las experiencias locales, lo que implica una planificación descentralizada. Sin embargo la planificación local no puede reemplazar a la central. Proyectos complejos a gran escala y con una necesidad intensiva de capital, que se expanden a través de varias regiones y ecosistemas, requieren de un diseño y control central. En la medida en que dichas actividades afecten las condiciones locales, la población y organizaciones en la región también deben involucrarse en esas actividades. Al mismo tiempo, la dirección y control centrales son necesarios para aplicar pautas, como las relacionadas con la distribución de ingresos y la calidad del medio ambiente. Durante el proceso de descentralización se deben crear canales de comunicación efectivos entre todos los niveles de planificación (central, intermedio y local), y entre las orga-

nizaciones en dichos niveles. Otras políticas que pueden asistir en el proceso de descentralización y fortalecimiento institucional incluyen una enmienda constitucional para declarar el derecho a un medio ambiente saludable y para dar el poder necesario a los ministerios públicos a establecer las regulaciones básicas que gobiernan el tema ambiental, su institucionalización del sector público y privado, y la continuidad institucional en la planificación y el manejo de proyectos y recursos humanos.

Finalmente, debemos recordar que ninguna de las recomendaciones de políticas que se acaban de enunciar pueden tener validez y resultar exitosas sin la creación de una conciencia ambiental. Una vez que la población se informa mejor acerca de las causas y consecuencias de la contaminación, comienza a participar en los debates y tiene la capacidad de emprender acciones en defensa de una mejor calidad de vida compatible con el respeto a la naturaleza. Los programas de educación y creación de conciencia ambiental deben ser organizados formal e informalmente, tanto en las escuelas como a través de los medios de difusión. En el caso de la educación terciaria, se debe apuntar a la formación de percepciones ecológicas positivas de los futuros profesionales, en especial de carreras sociales y tecnológicas. Otra meta importante debe ser la retención del capital humano técnico y profesional dentro de la Argentina, ya que tantos especialistas con gran preparación trabajan fuera del país debido a las limitadas posibilidades locales de trabajo. La capacitación ecológica a la población en general debe proveer información que aumente su interés acerca de los problemas ambientales y así crear un lazo emocional con el medio. Los efectos combinados de la educación y la difusión de información, base de la conciencia pública y de los cambios en percepciones, realzarán la importancia de una buena relación con la naturaleza y concientizarán progresivamente a la sociedad y Gobierno argentinos de sus problemas ambientales.

Conclusión

Hace más de 15 años la Argentina comenzó una profunda reconstrucción democrática. En los últimos tiempos, el país también debió empezar a considerar la posibilidad de establecer una relación democrática entre población y naturaleza. La conclusión final más importante de este ensayo reconoce que las metas generales del medio ambiente y del desarrollo económico no están en conflicto, sino que son las mismas, como el mejorar la calidad de vida y asegurar el bienestar de generaciones presentes y futuras. Ya que el desarrollo sostenible es en la actualidad la política de desarrollo oficial del Banco Mundial y las Naciones Unidas, la adopción de este modelo es también una necesidad práctica. Aunque el ámbito de este ensayo no incluye un análisis económico específico, es evidente que el desarrollo sostenible apoya y mejora una estructura de distribución de ingresos que favorece a las clases obrera y media y que eleva el nivel de vida de todos los argentinos, ricos y pobres, urbanos y rurales. El modelo propuesto también toma en cuenta las limitaciones domésticas y las obligaciones externas de la Argentina, así como

las restricciones existentes de los mercados internacionales. De esta manera, el modelo reconcilia los dilemas económicos tradicionales del país: justicia social o libertad económica; democracia o eficiencia; voluntad popular o liberalismo. Como otros países en vías de desarrollo, la Argentina tiene la ventaja de poder diseñar su base industrial en el presente para abordar realidades ambientales en el futuro. La anticipación a los cambios casi siempre resulta más eficaz que la adaptación tardía. La degradación ambiental no es una consecuencia inevitable de la actividad humana sino un resultado de ciertos modelos de desarrollo. Para países como la Argentina, el desarrollo sostenible no es solo un objetivo a largo plazo, sino un proceso de transformación económica, ecológica y social que debe ser emprendido hoy.

Bibliografía

- Bartelmus, Peter: *Environment and Development*, Allen & Unwin, Massachusetts, 1986.
- Conesa, Eduardo R.: *The Argentine Economy: Policy Reform for Development*, University Press of America, Londres, 1989.
- Dinerstein, Eric et al.: *Una evaluación del estado de conservación de las eco-regiones terrestres de América Latina y el Caribe*, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento-Banco Mundial, Washington D.C., 1995.
- Escobar, Gabriel: «Rio Shapes Up» en *The Washington Post*, 12/3/96, edición nacional.
- IIED-América Latina (Instituto Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo) et al.: «Sustainable Development in Argentina» en *Environment and Urbanization* vol. 4 N° 1, 4/1992, pp. 37-52.
- Muñoz, Heraldo et al.: *Environment and Diplomacy in the Americas*, Lynne Rienner, Boulder, 1992.
- Pignotti, Carmen: «World Bank Sounds Pollution Warning in Argentina» en *Reuter Online*, 20/3/96.
- Tulchin, Joseph S. et al.: *Economic Development and Environmental Protection in Latin America*, Lynne Rienner, Boulder, 1991.
- Vieira, Anna da Soledade: *Environmental Information in Developing Countries: Politics and Policies*, Greenwood Press, Connecticut, 1985.